

cional de Excavaciones; el Director del Museo Arqueológico Provincial de Alicante; el Delegado Jefe de Estudios de la Sección Delegada del Instituto Nacional de Enseñanza Media de Elche en Crevillente; el Presidente del Patronato de la Semana Santa Crevillentina; el cronista de la villa; dos Concejales designados por el Ayuntamiento de Crevillente, y dos Vocales designados por la Dirección General de Bellas Artes.

Sexto.—El Director del Museo será nombrado por el Ayuntamiento de Crevillente entre personas de reconocida competencia, previa aprobación de la Dirección General de Bellas Artes, y ejercerá las funciones de Secretario del Patronato.

Séptimo.—El Gobernador civil de la provincia de Alicante será citado a todas las reuniones del Patronato, que presidirá si asistiese personalmente y no lo hiciera el Director general de Bellas Artes.

Octavo.—De las actas de las reuniones se remitirá una copia a la Dirección General de Bellas Artes.

Noveno.—El Patronato en el plazo de un mes, a partir de su constitución redactará el Reglamento por el que ha de regirse el Museo y lo elevará a la aprobación de este Ministerio.

Décimo.—En el caso de que en algún momento el Museo no esté debidamente atendido la Dirección General de Bellas Artes, a propuesta de la Inspección de Museos, podrá decretar la clausura del mismo y sus fondos se depositarán en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.  
Dios guarde a V. I. muchos años.  
Madrid, 20 de abril de 1967.

LORA TAMAYO

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

## MINISTERIO DE TRABAJO

*ORDEN de 29 de abril de 1967 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por doña Montserrat Millet Genove.*

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 27 de febrero de 1967 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por doña Montserrat Millet Genove,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso promovido por doña Montserrat Millet Genove contra la Orden de la Dirección General de Previsión de 28 de octubre de 1963, confirmatoria del acuerdo de la Delegación Provincial de Trabajo de Barcelona de 19 de noviembre de 1962, y del acta de la Inspección de 10 de octubre de 1960, debemos declarar y declaramos válidas y subsistentes, por ajustadas a derecho, la Orden ministerial recurrida, y consiguientemente, el acuerdo y acta por ella confirmados; sin pronunciamiento especial en cuanto a costas.»

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Ambrosio López.—José Arias.—Pedro Fernández.—José de Olives.—Adolfo Suárez. (Rubricado.)

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.  
Dios guarde a V. I.  
Madrid, 29 de abril de 1967.—P. D., Antonio Ibáñez Freire

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

*ORDEN de 5 de mayo de 1967 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por «Uralita, S. A.».*

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 21 de febrero de 1967 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por «Uralita, S. A.»,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que sigue:

«Fallamos: Que con desestimación de la alegación de inadmisibilidad del presente recurso, interpuesto por «Uralita, Sociedad Anónima», contra la Resolución del Ministerio de Trabajo de seis de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro, sobre horario de trabajo en Santa Cruz de Tenerife, y con desestimación asimismo del recurso, debemos declarar como declaramos válida y subsistente la expresada Resolución; sin hacer especial imposición de costas.»

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Ambrosio López.—Juan Becerril.—Pedro Fernández.—Luis Bermúdez.—José Samuel Roberes. (Rubricados.)

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 5 de mayo de 1967.—P. D., Antonio Ibáñez Freire.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

*ORDEN de 5 de mayo de 1967 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por doña Constantina Seco Sáez.*

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 9 de diciembre de 1966 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por doña Constantina Seco Sáez,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que sigue:

«Fallamos: Que con estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Constantina Seco Sáez contra la Resolución de la Dirección General de Previsión de 20 de enero de 1966, que anulamos y dejamos sin efecto por no estar ajustada a derecho, declaramos y mandamos que la interesada sea repuesta en su cargo hasta cumplir los ocho meses de servicios no prestados, completando así los cuatro años de servicios efectivos según las obligaciones asumidas por la Administración, sin hacer pronunciamiento sobre costas.»

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Esteban Samaniego.—Francisco Camprubí.—Antonio Esteva. (Con las rúbricas.)

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 5 de mayo de 1967.—P. D., Antonio Ibáñez Freire.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

*ORDEN de 5 de mayo de 1967 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por «Puig y Font, S. A.».*

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 10 de marzo de 1967 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por «Puig y Font, S. A.»,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que sigue:

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto a nombre de empresa «Puig y Font, Sociedad Anónima», de Barcelona, contra Resolución de 21 de julio de 1964 del Ministerio de Trabajo, por la que se confirmó parcialmente la de la Dirección General de Ordenación del Trabajo de 20 de febrero del mismo año, modificándola en parte y en cuanto a la retroactividad de efectos de las calificaciones profesionales de las obreras Resurrección Quesada Miras, Isabel Valero González, Angeles Cañabate Pérez y Josefa Martínez Roca, debemos declarar y declaramos nula y sin efecto tal Orden como contraria a derecho, desestimando la demanda en cuanto a las demás pretensiones, y declarar como declaramos válida y subsistente la Resolución de la Dirección General de Ordenación del Trabajo de 20 de febrero de 1964, que desestimó el recurso administrativo interpuesto por la demandante contra acuerdos de la Delegación de Trabajo de Barcelona de 7 y 8 de noviembre de 1963, por los que se determinó la calificación profesional de las obreras de la ya dicha empresa Isabel Valero González, Angeles Cañabate Pérez, Resurrección Quesada Miras y Josefa Martínez Roca, como ajustada a derecho; sin costas.»

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—José Arias.—Juan Becerril.—Pedro F. Valladares.—Luis Bermúdez.—José Samuel Roberes. (Rubricados.)

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.  
Dios guarde a V. I.  
Madrid, 5 de mayo de 1967.—P. D., Antonio Ibáñez Freire.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

*ORDEN de 5 de mayo de 1967 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por don Carlos Munárriz Escondrillas.*

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 16 de febrero de 1967 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por don Carlos Munárriz Escondrillas,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que sigue:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la nulidad del expediente administrativo en el que recayó la Orden de la Dirección General de Previsión de 21 de febrero de 1966 que resolvió el recurso interpuesto por don Carlos Munárriz Escondrillas contra el acuerdo del Instituto Nacional de Previsión que resolvió concurso para proveer, entre otras, diez plazas de Médicos del Seguro Obligatorio de Enfermedad en Pamplona, nulidad que declaramos a partir del momento en que el señor Munárriz formuló por primera vez su reclamación, a fin de que una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de 17 de julio de 1958 se continúe hasta su resolución con arreglo a derecho; sin hacer expresa imposición de costas.»

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Evaristo Mouzo.—Justino Merino.—Pedro Martín de Hijas. (Rubricados.)

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.  
Dios guarde a V. I.  
Madrid, 5 de mayo de 1967.—P. D., Antonio Ibáñez Freire.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

## MINISTERIO DE INDUSTRIA

*DECRETO 1229/1967, de 10 de junio, sobre medidas extraordinarias para garantizar el normal abastecimiento de productos petrolíferos.*

Los Decretos dos mil quinientos sesenta y ocho/mil noventa y cuatro, de veinte de agosto; dos mil ochocientos treinta y uno/mil novecientos sesenta y cuatro, de once de septiembre, y tres mil ciento noventa/mil novecientos sesenta y cuatro, de dieciséis de octubre, autorizaron a «Compañía Española de Petróleos, S. A.», «Río Gulf de Petróleos, S. A.», y «Esso Petróleos Españoles, S. A.», la instalación de las refinerías de petróleo de Algeciras, Huelva y Castellón de la Plana, respectivamente, con la condición de que la totalidad de sus producciones, salvo las fracciones utilizadas en las plantas petroquímicas indicadas en los mencionados Decretos, serán destinadas a la exportación, aunque, por obvias razones, se previno que el Gobierno, en caso de necesidad, podría disponer que las producciones de dichas refinerías se destinaran al mercado nacional.

Las circunstancias internacionales por las que en la actualidad se atraviesa implican de suyo esa necesidad y, en consecuencia, exigen que se refuercen los medios existentes para el abastecimiento del mercado nacional con los productos petrolíferos de las refinerías antes aludidas en la cuantía que el Gobierno estime conveniente.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de junio de mil novecientos sesenta y siete,

### DISPONGO:

Artículo único. — Excepcionalmente, en tanto subsistan las actuales circunstancias internacionales, a juicio del Gobierno, podrá éste exigir de la «Compañía Española de Petróleos, Sociedad Anónima», «Río Gulf de Petróleos, S. A.», y «Esso Petróleos Españoles, S. A.», que los productos de las refinerías de dichas Entidades que habrían de ser exportados, según los Decretos dos mil quinientos sesenta y ocho/mil novecientos sesenta y cuatro, de veinte de agosto; dos mil ochocientos treinta y uno/mil novecientos sesenta y cuatro, de once de septiembre, y tres mil ciento noventa/mil novecientos sesenta y cuatro, de dieciséis de octubre, se destinen al mercado nacional en las cantidades que aquél señale y en las mismas condiciones económicas que los de las refinerías autorizadas para la venta de sus productos al Monopolio de Petróleos.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez de junio de mil novecientos sesenta y siete.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Industria,  
GREGORIO LOPEZ BRAVO DE CASTRO

*RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza a la «Empresa Nacional Eléctrica de Córdoba, S. A.», el establecimiento de la línea de transporte de energía eléctrica que se cita, y declarando en concreto la utilidad pública de la misma.*

Visto el expediente incoado en la Delegación de Industria de Córdoba a instancia de la «Empresa Nacional Eléctrica de Córdoba, S. A.», con domicilio en Madrid, calle Monte Esquinza, número 24, solicitando autorización para instalar una línea de transporte de energía eléctrica y la declaración en concreto de la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre Autorización de Instalaciones Eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas.

Esta Dirección General ha resuelto:

Autorizar a la «Empresa Nacional Eléctrica de Córdoba, Sociedad Anónima», el establecimiento de una línea de transporte de energía eléctrica de doble circuito a 132 kilovoltios, con conductores de aluminio-acero de 288,6 milímetros cuadrados de sección cada uno, sustentados por aisladores en cadena sobre apoyos metálicos, cuyo recorrido de 106,960 kilómetros de longitud tendrá su origen en la central térmica de Puente Nuevo (Córdoba) y su término en la subestación de Puerto Llano (Ciudad Real).

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular de la misma deberá seguir los trámites señalados en el capítulo IV del Decreto 2617/1966.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 9 de mayo de 1967.—El Director general, Julio Calleja.

Sres. Ingenieros Jefes de las Delegaciones de Industria de Córdoba y Ciudad Real.

*RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza a «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», la línea de transporte de energía eléctrica que se cita, y declarando en concreto la utilidad pública de la misma.*

Visto el expediente incoado en la Delegación de Industria de Málaga, a instancia de «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Sevilla, calle Monsalves, números 10 y 12, solicitando autorización para instalar la línea de transporte de energía eléctrica que se menciona y la declaración en concreto de la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas,